



POR LA SALVACIÓN DE COLOMBIA: ¡OPOSICIÓN Y RESISTENCIA CIVIL FRENTE AL GOBIERNO DE PETRO!



Únete a
nuestro canal
de WhatsApp



Editorial.
Frente al Gobierno
Petro: ¡oposición y
resistencia civil!
-Pg. 2

Análisis.
Poner los servicios
públicos a favor del
desarrollo nacional.
-Pg. 5

Entrevistas.
Voces de la
resistencia civil.
-Pg. 7 - 11

Homenaje
a Francisco
Mosquera.
-Pg. 8

*Aporte voluntario

♦ Por la salvación de Colombia:

¡Oposición y resistencia civil frente al gobierno antinacional y progringo de Petro!

Artículo

Después de dos años, el catastrófico resultado del Gobierno de Gustavo Petro es el avance de la recolonización estadounidense, a costa de la soberanía, la producción, el patrimonio, la cultura y las condiciones de vida de todos los colombianos.

- 01 ♦ **Economía Nacional; entremés de la recolonización promovida por Petro.**
- 02 ♦ **Soberanía; desmontando la fachada, más bases militares y desintegración del territorio.**
- 03 ♦ **Corrupción; componente estructural imperialista y práctica gubernamental petrista.**
- 04 ♦ **Resistencia civil, la respuesta ciudadana y popular al régimen.**

Petro fue ungido por una amedrentada oligarquía ante el masivo paro nacional de 2021 y fue presentado por el imperialismo estadounidense como Saltabancos Farándula, el personaje de Pombo, que como “gran patólogo ecléctico, fabricante de ungüentos y bálsamos”, acreditado de un historial oportunista, y reformista engañoso, podía acallar las protestas y acreditar como tabla de salvación para “los nadie” las retrógradas reformas impuestas por los organismos financieros internacionales y por Washington.

balance es el predominio en vastos territorios de una gama de grupos y grupúsculos ilegales, algunos bajo pretendidas enseñanzas políticas y otros tantos de criminales comunes.



Intervención de caricatura de Majan.

La deuda externa, pública más privada, alcanzó 200.000 millones de dólares (54 % del PIB) al final del 2023, y la deuda interna pública bruta superaba el 62 % del PIB. En pesos, la deuda del Gobierno Central pasó de 805 billones en septiembre de 2022 a 878 billones en marzo de 2024, con intereses entre el 10 y el 11 % para los títulos TES y del 10 % para los bonos externos; para servirla se necesitarán 112 billones de pesos en 2025 y la Hacienda se endeudará más para honrarla.

La balanza comercial aumentó sus números negativos y en 2023 se importaron 63.000 millones de dólares, mientras las exportaciones se redujeron de 57.000 millones en 2022 a 49.444 en 2023 y el déficit fiscal subirá del 3.6 % del PIB en 2023 al 4.9 % en 2024.

Acorde con las cifras del DANE, la tasa de desocupación nacional para junio de 2024 llegó al 10.3 por ciento, y la tasa de ocupados informales llegaba —en junio de 2023— al 55.8 por ciento, y hay 10.2 millones de empleados formales, frente a otros 12.8 millones que trabajan en la informalidad.

El trabajo decente, las condiciones dignas y las garantías laborales mínimas se conculcan, como en el arbitrario trato a los trabajadores del Ministerio de Trabajo, víctimas de la férula de la ministra Ramírez, pitonisa del sector sindical petrista, la misma que en el FOMAG, en asocio con los colegas de Hacienda y Educación y la guía del de Salud, arrasó con el derecho a la salud de 850.000 docentes, los jubilados y sus familias.

No hay renglón que se libre de la andanada antinacional y de destrucción del gobierno petrista centrado en el cumplimiento de los mandatos foráneos: da al traste con los índices económicos; dispara el costo del servicio de la deuda pública; hunde la manufactura y a empresas industriales insignia; afecta la explotación de hidrocarburos y a Ecopetrol la estratégica compañía nacional del sector; arruina sectores agrícolas como la leche, el arroz y otros géneros; cede la soberanía territorial; menoscaba la cultura y vitupera a los medios de comunicación; transgrede la autonomía de la Universidad Nacional, y de múltiples centros universitarios; adecúa la educación según prescripciones de la OCDE; arremete contra las instituciones cafeteras y se embolsilla la independencia sindical.

El cuadro se hace más dantesco con la fiesta desvergonzada de la corrupta burocracia que ascendió al poder del Estado con la patulea del Pacto Histórico en casi todas las entidades de la administración petrista y con el fracaso de la “paz total”, cuyo más palpable

♦ 01

Economía Nacional; entremés de la recolonización promovida por Petro

En el menú de desvalijar al país, Ecopetrol es objetivo de primer orden en su carácter de principal patrimonio nacional, bastión de la producción nacional y de las exportaciones. Con la regresiva reforma tributaria de Ocampo de 2022, se le incrementó la tasa impositiva del 33 al 42 por ciento, lo que le produjo \$53 billones al Gobierno mientras en 2023 las ganancias de la empresa se redujeron en un 40 por ciento. En el primer semestre de 2024, Ecopetrol le transfirió al Gobierno \$25,6 billones en tanto los pasivos crecieron \$8,2 billones, lo que evidencia de que se endeuda para dejar ahitos al insaciable Petro y a sus funcionarios.

Se prohíbe la exploración de nuevos pozos y no se reponen los explotados, acabando con las reservas (el índice de Reposición de Reservas, IRR, que era de 104 % en 2022 bajó a 48 en 2023). Así, el endeudamiento de la empresa ha alcanzado en 2024 dos tercios de los activos. Se perdieron 45 años de autosuficiencia en gas y en el 2024 se ha importado de Estados Unidos —por 123 millones de dólares— la tercera parte del consumo necesario para generar energía térmica y para el 2025 se importará a mayores precios, al menos el 12 % para la demanda no térmica.

Según el DANE, la producción manufacturera cayó –1,6 % anual de enero a junio y completó cinco trimestres en rojo, junto con las ventas reales y el personal ocupado.

Ediciones del periódico



En la agricultura se habían perdido, en junio de 2024, 109.000 puestos y en el comercio, 139.000, en un mercado donde la mayor oferta de mano de obra, nutrida entre otras razones por la diáspora de venezolanos que salieron de su patria, presiona los salarios a la baja o a la estagnación.

Al analizar la reforma laboral, la tercera edición del Periódico SOBERANÍA, esclareció que mantiene medidas anti-obreras como la contratación a término fijo, los despidos con “justa” causa y el fortalecimiento de la subcontratación y la promoción de empresas temporales, ajustada a las recomendaciones de la OCDE, sumo sacerdote de la globalización. Estandariza para el capital internacional las normas de trabajo de los países miembros, de ahí que cumpla compromisos con el TLC con Estados Unidos, en el capítulo 17, y con el de Canadá, como acotó la ponente del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes.

La reforma pensional es otro retroceso, ajustado al sistema de pilares recomendado desde 1994 por el Banco Mundial, que aumenta la edad de pensión a quienes pertenecen al primer y segundo pilar, fortalece y afianza el negocio para los fondos privados, bancos y fiduciarias, sube la edad y las semanas de cotización, baja la tasa de reemplazo, y denomina subsidios ínfimos, por debajo de los mínimos niveles de subsistencia, y en buena medida ya existentes, como “pensiones”, con la consabida táctica de engañar con eufemismos a los más necesitados y, hacia el futuro, despojar a los jóvenes trabajadores de cualquier posibilidad de tener una pensión real y digna.

El nivel de vida de los colombianos desciende sin cesar con el alza de los combustibles y constante de los alimentos de la canasta básica. Sin los “subsidios” o “ayudas”, indica el DANE, la incidencia de pobreza monetaria hubiese aumentado del 33 % de la población al 37 %; para la pobreza monetaria extrema el dato sería del 16,1 % y, si no se hubiesen incluido en el cálculo las cabeceras, pasaría del 8,9 % al 12,2 % en centros poblados y en las áreas rurales del 19,8 % al 29,8 %.

Los denominados pobres son la tercera parte de los habitantes con ingresos inferiores a \$435.375 pesos mensuales; los “vulnerables” son otra tercera con \$853.608, que apenas subsisten y la llamada clase “media” es la última tercera porción, que intenta arreglárselas con ingresos que fluctúan entre uno y los tres salarios mínimos. Sólo vive sabroso la cúpula del 1 %.

Se vislumbra con crudeza que el número de personas bajo la condición de inseguridad alimentaria pasó de 17.7 millones, a los seis meses de la posesión de Petro, a 17.8 millones en la actualidad y el 71.6 % de las familias no disponen de alimentos suficientes para mantener una buena salud. Mientras los índices de consumo tienen 5 trimestres de contracciones continuas, empujados hacia abajo por la regresiva reforma tributaria, esa medida inaugural del “cambio”, que recaudó en 2023 casi 279 billones en impuestos con un incremento anual del 22 %, impuso a cada persona 1.3 millones de pesos en IVA y, en promedio, a 2,7 millones de personas naturales, la mayoría de clase media, 3.6 millones por impuesto de renta.

Por esa exacción y el consecuente estancamiento económico, el recaudo de la DIAN cayó un 10.3 % en el primer trimestre del año 2024, el peor resultado desde 2001, debido a menores ingresos por los impuestos externos. En el mismo periodo, el recaudo en IVA creció un 11.3 % en el que los nuevos impuestos, regresivos contra la población más “vulnerable”, aportan \$700.000 millones en el gravamen a alimentos ultraprocesados, gaseosas y plásticos de un solo uso.

Como solución al desastre fiscal por el hundimiento de la economía y al déficit presupuestario del próximo año, el ministro Bonilla anuncia una nueva y aún más regresiva reforma tributaria, que según alertan analistas y dirigentes gremiales podría conducir a una recesión y la imposición de inversiones forzosas que eleva



♦ Gustavo Petro y Kristalina Georgieva (directora del FMI). Septiembre de 2024. Fotografía intervenida.

los riesgos sobre el manejo del ahorro, o un pacto por el crédito con las bancas regidas por las reglas y las tasas de mercado pero que el gobierno garantiza y subsidia, remedios inspirados en la reaccionaria idea de Proudhon en el siglo XIX de que el crédito es la varita mágica para reactivar la economía.

Carlos Marx puso esa quimera en su sitio al calificarla como “fantasía genuinamente filisteo considerar que el capital que produce interés es la forma principal del capital y tratar de convertir una aplicación particular del crédito — una supuesta abolición del interés— en la base de la transformación de la sociedad”. De ñapa hay recortes considerables en los gastos de inversión, un síntoma inequívoco de un Gobierno que, en lugar de impulsar la producción, la frena.

Entre los renglones más afectados por la estrechez fiscal, para garantizar el pago del servicio de la deuda, están varios de los indispensables para el conocimiento y el bienestar de la sociedad, como la ciencia con 25 % menos; la cultura también perderá el 25 %; el deporte y la recreación caerán el 66 % y las telecomunicaciones el 33 %, al mismo tiempo que se gesta la implantación de un duopolio en ese campo con América Móvil del magnate Carlos Slim y de la multinacional Millicom, con sede en Luxemburgo, que anda detrás de apoderarse a precio de quema de la participación estatal en UNE, de EPM, y en Coltel.

Ni el sector agropecuario, al que el proyecto de presupuesto 2025 se prevé una reducción en inversión de \$3.9 billones ni la supuesta reforma agraria, de las principales banderas del autodenominado gobierno del “cambio”, van por buen camino. De los 3 millones de hectáreas prometidas en campaña, la meta se redujo a 1.5 millones y hasta julio del 2024, según cifras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), solo se habían comprado 100.768 hectáreas, menos de la décima parte del objetivo.

Las pocas tierras repartidas son de poca o ninguna vocación agraria y las transacciones de adquisición están glosadas por la Procuraduría y la Contraloría por sobrepuestos y corrupción.

De 5 millones de toneladas de alimentos que se importaban en 2006 se pasó a 16 en 2023; asimismo, se importaron entre 10.719 y 15.000 toneladas de lactosueros por un valor de 11.5 millones de dólares y los lecheros producen a pérdida mientras compiten con importaciones baratas que hacen las multinacionales instaladas en Colombia en un mercado global donde una vaca suiza recibe el equivalente a \$1.700.000 mensuales en subsidios. Una competencia aplastante.

La ganadería bovina decae -0.01 %, la caña de azúcar -0.1 % y el arroz -15.2 %. De cada 100 pesos de crédito de fomento agropecuario, se concentran 75 en grandes compañías, 11.3 van para las medianas y solo 13 para pequeños productores. El café pasa por ciclos volátiles de precios, al alza y a la baja, sin que el Gobierno Petro aporte nada al Fondo de Estabilización, como lo ordena la ley 1969 que lo creó y le retorne la rentabilidad a 550.000 productores. Todos están amenazados además por el elevado catastro multipropósito y las valorizaciones de los predios rurales que serán como piedra de molino al cuello de los naufragos.

El agro y la industria intentan sobrevivir en tan desfavorables condiciones y al tenor de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que Petro no renegoció, como prometió en campaña y según reiteró en Pitalito como presidente. A las asimetrías derivadas de los inicuos acuerdos, se han de agregar las secuelas de la política económica, guiada por la ortodoxia neoliberal monetaria, cambiaria y fiscal, aplaudida en dos visitas de supervisión por el FMI.

El futuro económico para Colombia se avizora más negativo aún en el marco de las leoninas negociaciones secretas en el proyectado ingreso a la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP), la versión remozada del fallido ALCA de las épocas de los Bush, ahora promovido por el gobierno de Biden.

Petro está hincado ante la recolonización económica, asumió una indigna postura que intenta ocultar que el encargo recibido en realidad se orienta a subordinar más el destino nacional a los designios e intereses de Estados Unidos, camuflado con palabrería, astucia y con la magnificación de los remedos reformistas como una panacea.

♦ 02

Soberanía; desmontando la fachada, más bases militares y desintegración del territorio

El apuntalamiento del ardid petrista, montado por sus patrocinadores y titiriteros de la Casa Blanca, obedece a la necesidad de fortalecer el dominio de la superpotencia en el hemisferio americano. Como lo ratifican el general del Estado Mayor Conjunto, CQ Brown, y la general Laura Richardson, cabeza del Comando Sur, en la Conferencia de Defensa Suramericana 2024 en Santiago de Chile con la aplicación de su política de dominio fortalecido (EDA, Enhanced Domain Awareness) y la adopción de un Espacio Común Operativo



Imagen elaborada por Colombia Soberana.

Espacial para esparcir “polvo de Inteligencia Artificial” que pueda atender las necesidades de seguridad y las operaciones de los gobiernos, entre otras, en infraestructura, información, recursos humanos y cultura.

En la partitura se exprimen hasta la última gota los recursos y el mercado nacionales, se procura por asaltar los nuevos yacimientos clave para la transición energética, se alardea sobre las diarias angustias y preocupaciones de la gente, como careta para facilitar su expoliación y de contera, se ratifica a Colombia como el “socio estratégico”, para asegurar el poder regional de Norteamérica ante las enormes dificultades económicas y geopolíticas que enfrenta a escala mundial. Se coopta a la “izquierda” para conservar la hegemonía.

A Estados Unidos lo acosan el fantasma de la recesión, que pende como espada de Damocles sobre la economía yanqui; las dificultades comerciales que enfrenta con China y otros países que también pugnan por una tajada del pastel; los continuos descalabros que enfrenta para cimentar su posición militar en Europa y Asia y el progresivo declive de las condiciones de vida, en la seguridad social y en la educación de su población.

Esa situación declinante lo obliga a jugar todas las cartas que tiene a nivel mundial y en su patio trasero, en el que, adecuado a las particularidades de cada nación, utiliza representantes bien de la derecha abierta o bien del raído “progresismo”, sumiso a sus disposiciones como obsequiosos súbditos de Washington.

Petro, en tal misión, en tanto proclama a Colombia como “potencia de la vida”, ofrece en bandeja el territorio nacional para que el Comando Sur del Pentágono despliegue sus ejércitos, agencias de seguridad y centros de “inteligencia” en Gorgona, Pereira, La Guajira y el Amazonas (donde sobrevuelan a voluntad helicópteros de Estados Unidos) como nuevas bases para el control continental, las que se sumarán a las 46 que tenía en Suramérica en 2022, 9 de las cuales establecidas en Colombia.

Las fuerzas militares colombianas realizan continuas prácticas “conjuntas” con las del US Army en el Caribe y el Pacífico que les marca la bitácora cotidiana como un destacamento más a órdenes de la general Laura Richardson, la genuina ministra de Defensa del Gobierno de Petro.

Tanta felonía se envuelve en una prédica “verde”, alineada con la agenda ambiental de las grandes corporaciones monopolistas mundiales, en caza de más lucro sobre la biodiversidad, las mercancías “limpias” y las emergentes energías renovables, nuevos filones que acumulan para revertir la tendencia a decaer de las tasas de ganancia. La reclamada soberanía sobre el territorio ya no es ni fachada, pasó a la obsolescencia. Y en el oscuro y deliberado intento de agostar el país, los ujieres petristas pretenden eliminar los principales elementos que lo cohesionan, como la lengua, el mestizaje y los aportes culturales y científicos que de una u otra manera han conformado nuestra identidad.

En virtud de la “paz total”, se entregaron regiones enteras al antojo de grupos y grupúsculos armados, de “insurrectos errantes”, que amedrentan la población, imponen sus arbitrios y cimentan sus negocios ilícitos, con la licencia de los comisionados petristas que les otorgaron el carácter político a tales bandolas.

Cabe en este trágico episodio la lapidaria sentencia de Francisco Mosquera en 1985 frente a un proceso similar al de las diversas “conversaciones” y mesas actuales:

“Cada quién creyó reafirmar lo suyo, un presidente bufo escenificando el papel de campeón de la confraternidad nacional; unos congresistas borregos sublimando las magnanimidades del despotismo burgués y unas oligarquías impotentes, gloriándose no de eximir de culpa a unos cuantos adversarios detenidos o interdictos, sino de perdonarle la existencia a una revolución arrepentida”.

Y añade, referente a las temáticas:

“Fuera de la lista no hay verdad, esferas, órbitas y ámbitos dignos de mencionarse y sobre los cuales no se piense verter la savia unificadora de la pacificación. “Y, los diferentes grupos “guerrilleros”: “En lugar de corregir con mesura los descarrilamientos de su táctica, andan a la caza de enmendarle la plana al régimen, reafirmando en el desafío implícito de no prescindir del manual de Ernesto Che Guevara”.

Colombia anhela y espera la paz y en especial los pobladores de las regiones más atormentadas. Pero el camino a seguir no son las proclamas vacuas y altisonantes o las treguas acordadas para incumplirlas, sino el desarme de los grupos amparados en un mascarón “político” y de quienes delinquen sin tapujos. La mínima garantía para la ciudadanía, en el presente arreglo institucional, es que solo el Estado establezca las políticas militares y sea depositario único de la tutela jurídica.

Las “conversaciones” no pueden regirse con agendas establecidas e impuestas, donde quienes deben deponer las armas deciden las reglas sin restringir sus acciones violentas y pontifican sobre todos los asuntos, ya sea económicos, políticos, culturales e, incluso, morales y “éticos”.

Lo seguro, así el proceso llegue o no a “buen puerto”, es que el Tío Sam aproveche el estado de indefensión del territorio para inmiscuirse todavía más en el control político, económico y militar como, con ocasión de la mascarada de la Cumbre COP 16 en Cali y las amenazas de los reductos extremistas, el alcalde Eder, elegido por movimientos “alternativos”, apele al New York Police Department (NYPD) para la seguridad urbana con el permisivo visto bueno de Petro y del General Salamanca. La zozobra sirve de coartada para acrecentar la intervención extranjera.

♦ 03

Corrupción; componente estructural imperialista y práctica gubernamental petrista

El 13 de mayo de 2024, Colombia Soberana expresó que:

“(…) la corrupción estructural, lejos de obedecer a condiciones nacionales, se origina en la relación que Colombia tiene con el resto del mundo” (...) “para mantener al país en un estado de cosas que permita el saqueo sin igual al que ha sido sometido por parte de poderosos intereses foráneos, especialmente de los Estados Unidos y los países de su órbita, se requiere de una clase política servil y genuflexa que anteponga los intereses extranjeros a los nacionales”.

“Con ese propósito, el imperialismo norteamericano y sus lacayos, han hecho de la corrupción estructural un aspecto clave de su modus operandi, tanto para el manejo de sus asuntos internos, como para controlar a países como Colombia, sin incurrir en los costos que acarrearían las ocupaciones militares. A partir de un arreglo corrupto de carácter sistémico, la elite gobernante entrega el manejo geo-político y macroeconómico del país a organismos internacionales como la OTAN, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial o el BID y demás organizaciones que representan intereses ajenos a los de Colombia, a cambio del manejo discrecional de una parte de los recursos públicos siempre que no controviertan los asuntos centrales de la agenda nacional”.

“En otras palabras, el pacto corrupto estructural consiste en que gobiernos serviles sigan en una espiral de endeudamiento que hace del capital financiero internacional, y no del ahorro nacional, su principal variable. Así, podrán hacerse a un porcentaje de los recursos públicos con un doble propósito, robárselos para su propio beneficio y corromper a la población que los elige para que acepten la aplicación de políticas contrarias a su bienestar. He allí la causa principal de la corrupción en Colombia”.

El “cambio”, que en realidad es el ajuste a nuevas agendas neocoloniales y la ampliación de los lineamientos trazados desde el Departamento de Estado, se convirtió en bandera obligatoria del discurso político, para “controlar la explosión del volcán”, desatada en los paros de 2019 y 2021 con la participación de millones de indignados y con el sino de la desesperanza.



Imagen elaborada por Colombia Soberana.

Para ello, las clases dominantes tradicionales y el mismo imperialismo, se vieron obligados a recurrir al sector que más podía confundirlos y apaciguarlos. Así accedió al poder Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, organización útil, como lo hizo en 1991 en el gavirismo, para montar la tramoya de la patraña, un segundo “revolución”.

El volcán sería aplacado, pero la contraprestación para los estafadores de la conciencia popular es franquearles el saqueo de los presupuestos, los contratos y las nóminas, como ha sido usanza por décadas:

“(…) para impulsar la agenda reformista de carácter regresivo el gobierno de Petro y Márquez también debe darle continuidad al régimen de corrupción que garantiza la aplicación de políticas contrarias al interés nacional. Esto se hizo evidente desde la campaña electoral” y “una vez instalados en el gobierno, la abultada lista de escándalos de corrupción abarca una amplia gama de sectores y niveles de gobierno.”

El sinnúmero de escándalos inició antes de llegar a la Casa de Nariño, al exceder el tope legal y tener fuentes oscuras para la financiación de la campaña electoral y es el diario vivir del Gobierno, de su cúpula burocrática, de sus congresistas aliados y de los empresarios amigos.

Emulan en el torcido proceder a desmedidas bandas de malhechores, como acaeció en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD); o en las compras a precios exorbitantes de terrenos de origen dudoso y sin vocación agraria para la Reforma Rural Integral (RRI); o en los contratos de energía solar del mentor Euclides Torres con el FENOGE; o con el rápido enriquecimiento de los asesores catalanes, denunciado por la prensa internacional; o con los ruidosos helicópteros en Ecopetrol; o con enrevesados contratos en el Sena con Internexa; en Mintic para pautas publicitarias ilegales y el proyecto Escuelas Potencia Digital, en Colpensiones para adecuar un call center y en la Cancillería con los pasaportes o los de energía en la hidroeléctrica de Urrá, entregados a predilectos del régimen, o los direccionados por el ministro Bonilla a favor de los miembros de la comisión interparlamentaria de crédito público. La asociación para delinquir parece común denominador en la gobernanza actual.

Los descarados abusos con los dineros públicos no difieren —y a veces superan— los negociados y podredumbres de los regímenes anteriores y con seguridad todavía están por destaparse más disparates ocurridos en la Cueva de Rolando en la que el petrismo convirtió el aparato estatal en su cuarto de hora.

♦ 04

Resistencia civil, la respuesta ciudadana y popular al régimen

Ante la contundencia de los hechos, Gustavo Petro se ingenia como mampara un supuesto “golpe blando” en su contra, que esgrime para sonsacar una lesiva reforma constitucional, sea con una constituyente o mediante decretos.

Es una huida hacia adelante para imponer las estipulaciones de Washington y los organismos internacionales, varias de las cuales quedaron inscritas en XI Diálogo Colombia-Estados Unidos, con la cacareada lucha contra la crisis climática como punta de lanza, con modelo financiero-corporativo incluido, adobada con la implementación de la paz y de un acuerdo contra la corrupción como pilares con los que pretende proseguir los dos años que le restan para la labor destructiva que acomete.

Como diligente vasallo con el que cuenta el imperialismo norteamericano, trata de seducir con un “pacto nacional” y sumar a las fuerzas políticas que lo apoyan a otras nuevas proclives, que lo critican no por la índole reaccionaria de sus medidas y reformas, envueltas

en empaque demagógico, sino por la falta de “eficiencia” para ejecutarlas, y también atrae a las “independientes” que de boquilla critican “lo malo” pero que votan a favor el grueso de las iniciativas oficialistas.

Medios tradicionales, influencers, redes y las empresas de comunicaciones de los caicos, las del entretenimiento, el saber y la cultura, actúan como propagandistas del régimen, al que, pese a los disparates y traposondas, le extienden cada que pueden el visto bueno, de colaborarle para fortalecer la democracia y el sistema neocolonial vigente.

Pese a tanta truculencia de la táctica petrista, bajan los índices de aprobación y favorabilidad frente al desempeño gubernamental, crecen el pesimismo y el rechazo y amplios sectores del “pueblo”, al que tanto invocan el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez, se organizan en continuos actos de resistencia civil.

En esta cuarta edición de SOBERANÍA algunos de los dirigentes de las justas protestas explican las razones y la extensión de las diferentes iniciativas. Son luchadores que alientan el auténtico patriotismo y la genuina democracia y con cuyo concurso se puede sembrar la semilla de un frente que proclame, con más amplitud y eficacia, la defensa de Colombia, del patrimonio público, de la producción nacional, y del bienestar general, fundado en los verdaderos intereses populares y democráticos y en la indispensable soberanía.

El deber del partido Colombia Soberana es reproducir y difundir las resistencias y promoverlas para que, como en la mencionada fábula de Pombo, el bebedizo suministrado a porrones a la víctima no la lleve a “trágico término”. Que el impostor no pase, que se entrase su obra de entrega y traición.

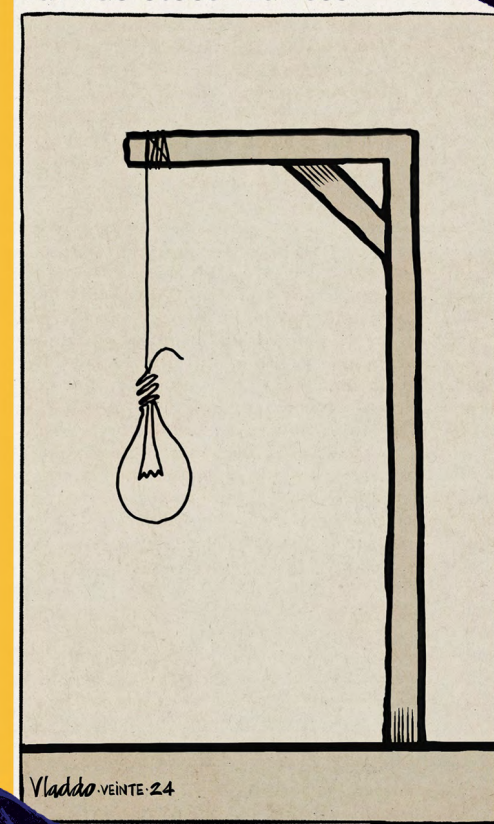
Análisis:

Arrebatarle los servicios públicos al capital financiero y ponerlos al servicio del desarrollo nacional

El uso de diferentes tipos de energía está relacionado con las grandes transformaciones en la historia de la humanidad. El descubrimiento de cada una de sus fuentes ha significado revoluciones técnico-científicas que se corresponden con cambios en los modos de producir. Así, el uso del petróleo llevó a la Primera y Segunda Revolución Industrial y la electricidad y la energía nuclear cimentaron la Tercera. En la actualidad, el debate global acerca de las fuentes y los modos de producir energía repercute en todos los ámbitos de la vida nacional.

El nivel de acceso a los servicios de electricidad, agua potable, saneamiento básico y gas natural es un parámetro para establecer el nivel de desarrollo de una sociedad. No es solo un indicador, el acceso a estos bienes indispensables para la vida moderna resultan fundamentales para mejorar la calidad de vida, por mejorar la ejecución de tareas cotidianas y son el motor del desarrollo industrial.

Tarifas electrizantes



Intervención de caricatura de Vladlo.

Más de tres décadas de saqueo en los servicios públicos

Con la división internacional del trabajo establecida por los Estados Unidos a través del llamado “Consenso de Washington” en 1989, a Colombia le correspondió el lugar de productor de materias primas y mano de obra barata e importador de productos de alto valor agregado, truncando las posibilidades de un auténtico desarrollo nacional. Esto abrió la inversión del capital financiero a nuevas ramas como telecomunicaciones y servicios públicos.

La Constitución de 1991 y las leyes 142 y 143 de 1994 fueron el marco jurídico que facilitó las privatizaciones de los servicios públicos en Colombia. En el marco del Plan Colombia, instrumento de dominación económica y militar que usa como excusa la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia, se creó un completo cuadro de reformas económicas entre las que se enlista las privatizaciones que el país debe acometer como las que se llevaron a cabo con Isagen y 14 distribuidoras regionales y la eventual privatización de ISA. [Suárez, 2010. Confianza Inversionista. Pág. 22].

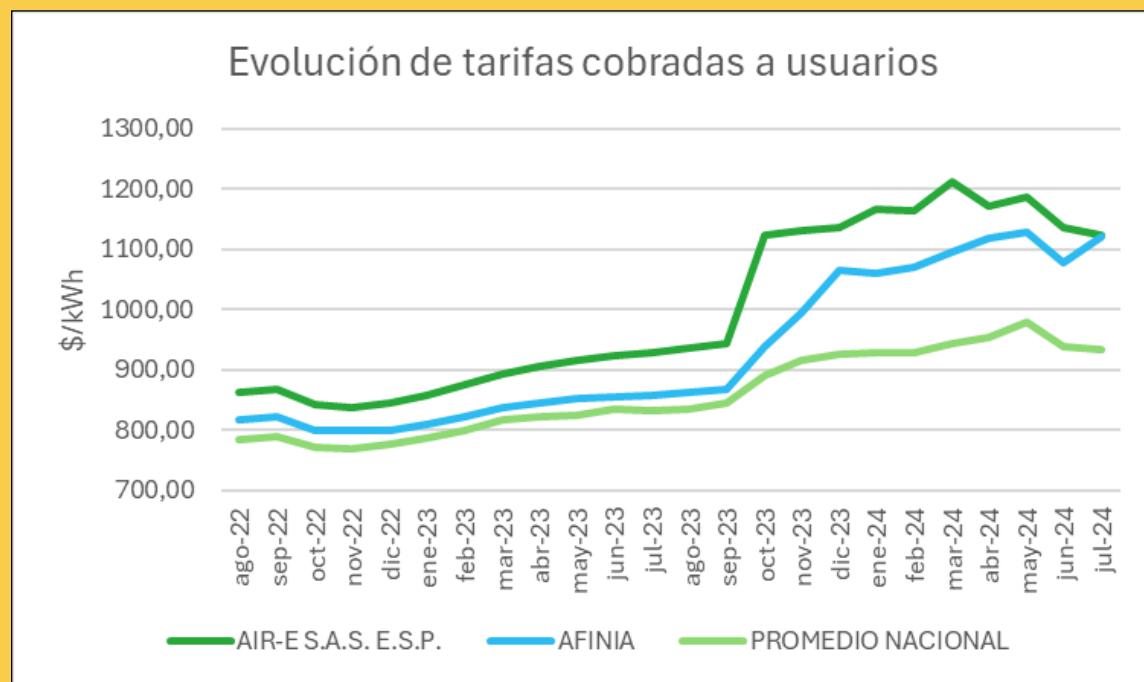
Este proceso privatizador inició con la venta de la Empresa de Energía del Pacífico y la capitalización por parte de CODENSA de la Empresa de Energía de Bogotá en 1997, y continuó en 1998 con la entrega al capital privado de 14 distribuidoras de la región Caribe con lo que se abarcó al 42 % de los usuarios de servicios públicos del país. Durante este periodo los gobiernos de turno se aprestaron a reorganizar el sector para servirlo en bandeja de plata al capital financiero transnacional; a través de cuantiosas inversiones públicas que le costaron al país alrededor de 2.000 millones de dólares (CONPES 3122 de 2001). El Estado pagó deudas de ISA, condonó deudas a ICEL, CORELCA y otras distribuidoras; repartió utilidades de ISA y Betania para fortalecer electrificadoras y pagó deudas de las empresas con el Mercado Mayorista de Energía. Todo esto para facilitar la privatización. En 1998, las empresas Electrocosta y Electricaribe también fueron vendidas a HIE Caribe Energy (Houston Industries Inc. y Electricidad de Caracas S.A.) por un monto total de 1.4 billones de pesos, luego vendida a la transnacional española Unión Fenosa.

En los años subsiguientes, el común denominador fue altas tarifas de energía, cortes del servicio, afectación a los electrodomésticos, golpes a la producción y corrupción por robarse los subsidios de los más pobres. Aún sigue en veremos el retorno de estos recursos a los más vulnerables.

La liquidación de Electricaribe en 2017 no solucionó nada y llevó a una fracasada búsqueda de nuevos inversionistas extranjeros; aunado a la consolidación de un marco por medio del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, que creó el Régimen Tarifario de la Costa Caribe (RTCC). Este incluye una serie de medidas para mejorarle el negocio a los operadores privados como que el pasivo pensional pase a cargo del Estado y nuevas exenciones tributarias, así como un régimen especial que permite una regulación diferente a las demás comercializadoras. También se incluyó una sobretasa de \$4/kWh a estratos 4, 5, 6 e industriales, la cual tumbó la Corte Constitucional. De esa manera, el gobierno de Duque le aseguró una alta ganancia al privado que asumiera la operación.

♦ El papel del Gobierno Petro y el desmonte de los subsidios a la energía: un mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Con su Plan Nacional de Desarrollo (PND) el gobierno de Petro continuó la senda privatizadora y antinacional del de Duque. Este último estableció un régimen tarifario especial que el gobierno de Petro mantuvo por medio del artículo 372 de su PND y que le garantiza al operador “una tasa de ganancia hoy del 12,09 por ciento” mientras “Cedió por la décima parte los activos de \$6,5 billones, autorizó los contadores -inteligentes- AMI y una facturación -gota a gota-, recargada con el pago de inversiones futuras y las pérdidas no eléctricas. Los beneficiarios fueron Afinia, de EPM, con cuestionados contratistas como Deltec, y Air-e, de un holding de empresas de papel en Panamá” [Suárez, 04-11-2022. El Caribe, en pie].



Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

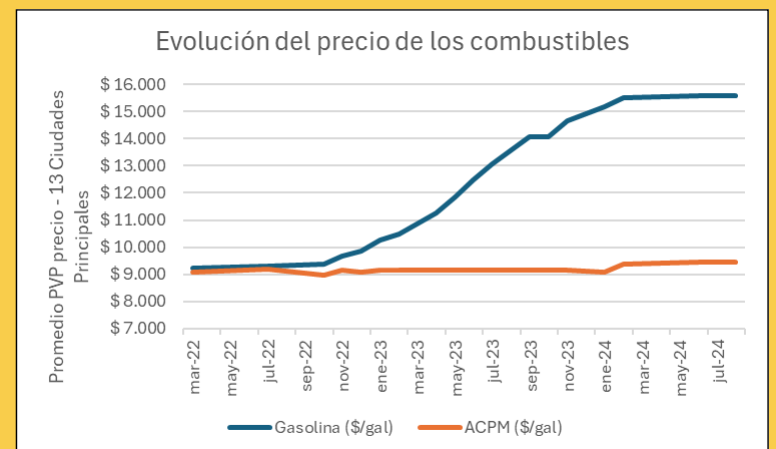
Desde que Petro asumió, la tarifa se disparó. Subió 21 % (Air-e) y 30 % (Afinia) en el último año, dos y tres veces más, respectivamente, que el promedio nacional y desde que Petro es presidente aumentó, en promedio, 33 %. A julio de 2024, el costo de kilovatio por hora (kWh) en Air-e y Afinia fue un 20 % superior a la media nacional. Esto en la región con mayor inseguridad alimentaria encontrándose por encima del promedio del país en prevalencia grave (Dane); la pobreza monetaria es 7,6 por ciento mayor a la del resto del territorio, la pobreza monetaria extrema es superior al 12 % de los hogares y el índice de Gini es 0,50 (Dane). “Si en Manizales (Chec-EPM) la factura de estrato 4 es el 7 por ciento del salario mínimo, en Afinia se traga el 25” [Suárez, 04-11-2022. El Caribe, en pie].

En el informe técnico intitulado *Reforma de los precios de la energía de 2019*, el Fondo Monetario Internacional instruyó el desmonte de los subsidios a la energía de los estratos 1, 2 y 3. Este mismo informe orientó aumentar los precios de los combustibles, a través de la eliminación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), como lo está aplicando el Gobierno, lo que incrementará los costos de producción y distribución y traerá más carestía a los colombianos. El proyecto del PND de Duque eliminaba los subsidios para el estrato 3 y los disminuía del 60 % al 50 % y del 50 % al 40 %, para los estratos 1 y 2, respectivamente [La república, Acosta M. *Eliminación de los subsidios*, 16 de Enero, 2019]. Aunque dicha medida no prosperó en su momento es prueba del sometimiento a los mandatos del FMI.

El autodenominado gobierno del “cambio” da pasos agigantados para cumplir los dictámenes del FMI. Con su PND, se modifican los criterios para entregar los subsidios de energía a los usuarios ubicados en los estratos 1 y 2, a través del “uso de tecnologías de medición inteligente del consumo de energía eléctrica” (Art. 108 Ley 2294 de 2023), es decir los famosos medidores AMI que tanto rechazo han generado entre los habitantes de la costa Caribe. Esto llevará a que la continuación de los subsidios, que serán diezmos, esté sometida a la implementación de tecnologías que ha sido rechazada por elevar los costos de facturación a los usuarios. ¡Zanahoria y garrote!

Y lo más grave: ¡la eliminación del subsidio a las tarifas de electricidad al estrato 3!, sector con algún ingreso estable, pero vulnerables ante cualquier hecho que afecte sus ingresos.

A este difícil panorama hay que agregarle un nuevo azote contra los usuarios; la opción tarifaria, que refiere al cúmulo de deudas insolutas producto de alzas no cobradas durante la pandemia de COVID-19, descargando la crisis sobre estos. Si bien los expertos han manifestado que se soluciona con el 4,5 billones de pesos, el Gobierno se ha hecho el de la vista gorda y su demagogia radica en culpar a terceros, sin solución al problema de fondo.



Elaboración propia a partir de los Precios de combustibles líquidos - creg.gov.co

Conclusiones

La estructura económica y jurídica de los servicios públicos es fruto de décadas de ajustar las normas a las necesidades del capital financiero para obtener la máxima ganancia.

La política de imponer precios de país no productor de petróleo, que elevó el precio de la gasolina de \$9.212 a \$15.513 en menos de 2 años (+68 %), sumado a la antinacional decisión de suspender la exploración y explotación de petróleo y gas, el aumento real de las tarifas de energía a través de la prolongación de la opción tarifaria y del régimen tarifario especial, constituyen un explosivo cóctel que atenta contra la calidad de vida a, la dignidad de los colombianos y el interés nacional al avanzar en políticas que destruyen uno de los principales activos del país: la Soberanía Energética.



Imagen elaborada por Colombia Soberana.

El gobierno antinacional de Petro avanza en su embestida para destruir las fuentes ciertas de producción nacional de energía mientras promete fuentes inciertas de producción de energía controladas por multinacionales extranjeras como en el caso de la Guajira, en el que por enésima vez, se decide privatizar los recursos naturales del país a medida que se va descubriendo su utilidad; con Petro se afianza la era de la privatización del viento, la energía solar, los bosques, y otros.

Colombia Soberana invita a los usuarios a organizarse, a fomentar y mantener la resistencia civil contra las nefastas políticas antinacionales de Petro y a enarbolar las banderas de la defensa de la soberanía energética de la Nación materializada en Ecopetrol, EPM, ISA y tantos otros activos estratégicos que hacen parte del patrimonio público de los colombianos. Contra el Gobierno de Petro, **oposición y resistencia civil!**

Debemos protestar para rechazar la Reforma Laboral y echar abajo la Reforma Pensional



Entrevista

Miryam Luz Triana

♦ Presidenta de la Confederación General del Trabajo (CGT) hasta septiembre de 2024.

1. ¿Cómo analiza estos 2 años del Gobierno Petro?

A los trabajadores en general no nos está yendo bien. El primero objetivo de este Gobierno debió ser la generación de empleo y no ha sido así. El pueblo quiere empleo, no subsidios; quiere garantías para una vida digna. Cuando se priorizan subsidios antes que empleos, no vamos por un buen camino. Un ser humano se dignifica con empleo y eso no pasa por la imaginación de este gobierno.

2. Hay conflictos en varias entidades del Estado. ¿Cómo analiza la política laboral y sindical del gobierno Petro?

Lo que está pasando es muy grave. La vida laboral está en riesgo. Y estamos demasiado quietos. Debemos protestar para rechazar la Reforma Laboral y para echar abajo la Reforma Pensional, que la firmaron en plena huelga en el Ministerio del Trabajo.

Miren lo que pasó en el Ministerio del Trabajo. No puede olvidarse la lucha para que se nos admita la huelga en la OIT y en nuestro país, para que ahora tomen como escarmiento a estos trabajadores, penalizando el derecho a huelga. No tiene perdón de Dios que dejemos pasar esto. ¿Cómo es posible que la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, trate de aprobar una Reforma Laboral, que quién diablos se la va a cumplir, si ella se burla de todo? No paga salarios, sanciona a quienes hacen la huelga, tiene despidos en plena huelga. Comete abusos laborales. ¿Con qué autoridad moral ella le pondrá la cara a los trabajadores, al empresariado y a los congresistas?

El movimiento sindical tiene que respaldar a los trabajadores del Ministerio de Trabajo, para defender el derecho a huelga. Quien no lo haga es un vendeobreros.

3. En el pasado, las Centrales Sindicales, incluida la CGT, se opusieron al debilitamiento de Colpensiones y del Régimen de Prima Media. ¿Qué opina de la reciente reforma pensional, en la que salen fortalecidos las AFP y debilitada Colpensiones?

Para la CGT la Reforma Pensional se tiene que caer. Nosotros hemos acompañado las demandas contra la Reforma Pensional, porque no es cierto que esa reforma vaya a favorecer a los trabajadores.

El pilar solidario existía, para eso no se necesitaba una reforma. Petro prometió en campaña \$500.000 pesos y no llegó ni al 50 %. Para hablar de cosas que prometió y no hizo. Y cómo lo venden a un pobre abuelo que no tuvo la oportunidad de cotizar, que con \$225.000 pesos es lo mejor que se puede hacer bajo el amparo de la reforma pensional. Si esa reforma pensional se cae, los abuelos no perderán los \$225.000 pesos, porque eso viene de otra parte.

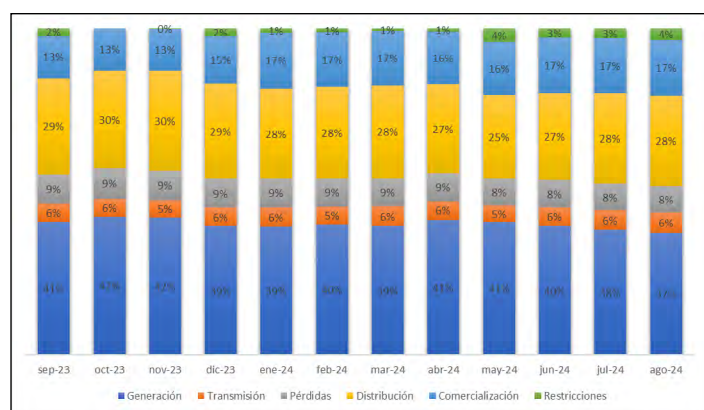
Si no se aumenta el pilar de cotización, los jóvenes no alcanzarán a pensionarse. Y se aumenta creando empleos. La reforma pensional y la laboral debieron ir de la mano, generando empleo y aportes. Eso sí puede ayudar a generar la solidaridad que se requiere para cubrir las pensiones.

4. El 21 de abril se realizó una de las mayores expresiones de resistencia civil contra las medidas del gobierno Petro. ¿Cómo interpreta este fenómeno?

Nada de lo realizado por este Gobierno reivindica lo que exigimos en los paros nacionales de 2019 y 2021. Por ejemplo, más alzas de combustibles que las que ha decretado Petro, no se dieron en gobiernos anteriores.

No he acompañado ni una sola de las marchas a favor de Petro. Primero, porque me parece terrible que le hayan entregado a un Presidente de la República la plaza pública, que nos costó tanto conseguirla. Conseguir las principales plazas de las ciudades cada 1° de mayo fue una lucha de los trabajadores y se la entregaron en bandeja de plata a este presidente. Hasta eso ha hecho este gobierno en contra del país: hacernos perder escenarios, simplemente por la estigmatización que se está haciendo.

◆ Promedio porcentual nacional de los componentes del costo unitario de la tarifa de energía



Elaboración propia a partir de datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Información tarifaria de energía 2024 - Principales comercializadores integrados al operador de red agosto.

Fórmula para determinar el valor del servicio de energía

$$CU_{n,m} = G_m + T_m + D_{n,m} + C_v_m + PR_{n,m} + R_m$$

Generación 30% Transmisión 7% Pérdidas 40% Comercialización 13% Restricciones 3%

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - Información tarifaria de energía 2024 - Principales comercializadores integrados al operador de red agosto.

Distribución, ¿es necesaria?

El 38 % del valor de la factura corresponde al componente de distribución. Este se refiere al costo de transportar la energía hasta el usuario final por medio de las redes locales. Estas empresas no agregan valor a la cadena de suministro y ganan casi 4 de cada 10 pesos. Esas empresas tienen un margen de intermediación del 30 %; este valor es mayor que el de las generadoras y comercializadoras. Este componente no es necesario, entre otras razones, porque el Estado ha realizado cuantiosas inversiones para mejorar las redes locales. ¿En los intentos de disminuir el costo de la tarifa, Petro le quitará el negocio a estas empresas?

5. ¿Qué le propone la CGT al movimiento sindical en las actuales circunstancias de desempleo, rebusque y alto costo de vida?

Unificar acción, entre todos quienes somos autónomos, pluralistas e independientes, para defender los derechos de los trabajadores.

Insisto. Deberíamos hacer un movimiento para rechazar la reforma laboral y pedir el estatuto del trabajo. ¿Cómo va a firmar una reforma laboral, una Ministra de Trabajo a quien le quedó grande respetar a 1500 trabajadores y está pisoteando la huelga?

Deberíamos promover una movilización alrededor de esas cosas. Todos los que nos sintamos con autonomía y pluralidad. Yo tengo dificultades con empleadores en varias negociaciones. Pero, no se puede obviar que lo que está pasando con la industria colombiana y con el empresariado nacional tampoco es bueno. Si se acaban las empresas, ¿quiénes somos los perjudicados? El pueblo. Quienes necesitan un empleo y no consiguen.

Los empleadores agremiados y los trabajadores sindicalizados que no estamos con el Gobierno Petro somos vistos como enemigos.



Caricatura de Beto Barreto - Paro del Ministerio de trabajo.

Petro acabó con el régimen de salud del magisterio y lo cambió por un modelo de negocio



Entrevista

Dimas Arias

♦ Profesor. Promotor de la Veeduría Nacional por el Derecho a la Salud del Magisterio.

1. Van dos años del Gobierno Petro. ¿Cuál es el balance de los compromisos del Gobierno con el magisterio?

Muy pobre. A los trabajadores no les ha cumplido los acuerdos negociados con sus organizaciones. Son cada vez más frecuentes las expresiones de resistencia como en el MinTrabajo, MinDeporte. El magisterio está saliendo a la calle y no es para menos, le ha ido peor que al resto, acabó con su régimen de salud, al cambiarlo por un modelo de negocio en el que gana la politiquería por el aumento de la burocracia en el Fomag y la Fiduprevisora, los grandes inversionistas en clínicas y hospitales, y pierden los maestros y sus familias que ahora son responsables de su propio riesgo en salud.

2. En un contexto en el que las mayorías en las direcciones de los sindicatos estatales mantienen el respaldo a Petro, ¿Cuál es la situación de los empleados públicos?

El deterioro de las condiciones laborales se mantiene, hoy es peor que hace dos años. Se recorta presupuesto a entidades estatales para honrar compromisos con el sistema financiero y garantizar el servicio de la deuda. El caso de los trabajadores del MinTrabajo, MinDeporte, DIAN, Fiscalía, Colpensiones y Sena así lo demuestran. Con la Pensional pretenden sacarle los recursos a los trabajadores para ajustar la regla fiscal.

3. Fecode es la mayor fuerza sindical del país y sigue respaldando a Petro. ¿Hasta cuándo seguirá esto así?

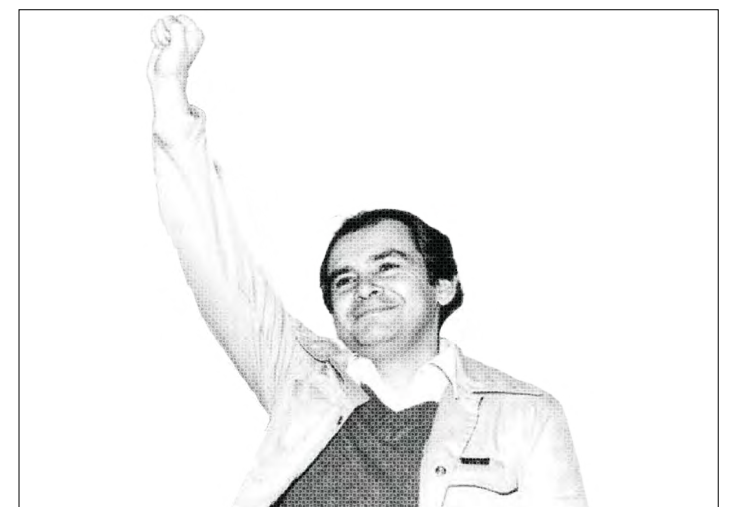
Ningún ejecutivo de Fecode parece dispuesto a luchar. Afortunadamente el proyecto de Ley Estatutaria se derrotó, pero los maestros desconocen que desde su primera presentación representaba los intereses de grandes inversionistas que ven la educación como un nicho de negocios al revivir el ánimo de lucro y apropiarse como norma las disposiciones del Banco Mundial para el sistema educativo.

4. ¿Qué pasa con la salud del magisterio?

Es cierto lo dicho por el ministro de Salud en los audios filtrados: no hay modelo. La situación es mala y con tendencia a empeorar. El Gobierno Petro hizo de nuestro derecho un jugoso negocio, en el que ganan grandes inversionistas extranjeros que hoy son dueños de las más importantes clínicas del país, los partidos tradicionales como Cambio Radical y la U con burocracia en el Fomag y la Fiduprevisora, también ganan con el negocio en la dispensación de medicamentos.

5. ¿Qué deben hacer los trabajadores ante este panorama tan incierto?

Debemos respaldar las luchas que están librando algunos sectores de trabajadores. Luchan por sus reivindicaciones laborales, otros, por el nombramiento de funcionarios para poder atender la población como en el ICBF; también contra la corrupción que sigue desangrando el erario público como en el Ministerio del Deporte. Es decir, los motivos son los mismos que en gobiernos anteriores. En consecuencia, la unidad de los trabajadores es un imperativo para la lucha, como sucedió en el 2019 y 2021 contra el paquetazo de Duque, la OCDE y el Banco Mundial, debemos recuperar las banderas antiimperialistas y derrotar la dirigencia sindical que está al servicio de la política contra los trabajadores y el desarrollo nacional que encarna el gobierno progringo de Petro.



Francisco Mosquera Sánchez, "tu viaje no se quedará sin cumplir"

Colombia Soberana rinde homenaje a la vida y obra de Francisco Mosquera, con ocasión de los 30 años de su muerte. Su legado teórico-práctico inspira y orienta las luchas patrióticas por una Colombia libre de la injerencia estadounidense, con ejercicio pleno de sus fuerzas productivas al servicio del bienestar de toda la nación.

Visita:
<https://soberania.co/colombiasoberana/frases-de-francisco-mosquera/2024/>

Entrevista

Es inexplicable el silencio de gran parte de la dirigencia política con los peajes



♦ Lina Arango ♦

Consultora en transparencia y líder ciudadana del Eje Cafetero, que hace años llama la atención sobre el abuso de los peajes en su región y en el resto del país.

1. Usted lleva varios años pronunciándose sobre el alto costo de los peajes y su proliferación por las vías de Colombia. ¿Por qué cree que el ciudadano del común debería apropiarse del tema?

El número de peajes en Colombia es excesivo. Como lo señaló Aurelio Suárez en una de sus columnas, pagamos, en promedio, un dólar por cada 8 kilómetros de recorrido en el Eje Cafetero [En Río-São Paulo se paga ese dólar cada 30 kilómetros; en Buenos Aires-La Plata, cada 77,1; en Estados Unidos, en la Turnpike Miami-Orlando, cada 34; en París-Lyon, 19,56 y en Quito-Guayaquil, más generosa, 174,6 kilómetros por un dólar (Saqueo, pág. 600)]. Hay concesiones que a pesar de tener peajes muy costosos no construyen obras que garanticen la seguridad de conductores y peatones; además, se encarecen los bienes y servicios que se comercian entre regiones.

Curiosamente, gran parte de la dirigencia nacional, regional y local guarda silencio ante la situación. Se consolidó un andamiaje de políticos, empresarios y contratistas que han vuelto hermético el tema para el ciudadano del común. En muchos casos, no aparecen los estudios técnicos de los impactos de los peajes que proliferan por todo el país y hay opacidad de los estados financieros y barreras de acceso a la información

2. A pesar de que se habla en foros y demás espacios académicos de integración regional, entre las tres capitales del Eje Cafetero, Pereira, Manizales y Armenia, se han instalado peajes muy caros que riñen con este propósito. ¿Qué opina al respecto?

En el caso del Eje Cafetero, la tan cacareada integración de sus tres capitales, Pereira, Manizales y Armenia se va al traste porque cada una de estas ciudades está cercada por peajes muy caros. Si bien a algunos contribuyentes se les puede deducir el pago de peajes del impuesto a la renta, a los más pobres este beneficio no les llega, por lo estamos ante un modelo regresivo.

Desde 1997, Autopistas de Café, cuyo mayor accionista es el grupo ARGOS-ODINSA, está a cargo de las conexiones entre Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. La concesión fue adjudicada hasta 2027. Recauda la renta de 7 peajes en apenas 256 kilómetros de vías (en promedio, un peaje cada 36 kilómetros). Muchos han cuestionado el papel de Autopistas del Café pues consideran que tan altos recaudos no se han visto reflejados en las vías, incluso, uno de los puentes a su cargo, El Alambrado, que une a Caicedonia (Valle del Cauca) con La Tebaida (Quindío), colapsó, y el puente El Rosario, entre Chinchiná y Manizales lleva cerrado hace más de un año, sin que Mauricio Vega, gerente general, haya dado explicaciones satisfactorias. A pesar de lo anterior, ODINSA aspira a administrar los peajes por 30 años bajo la nueva propuesta IP Conexión Centro. A todos los silencios, se suma el de Gustavo Petro que, al igual que sus predecesores, no muestra voluntad política alguna de tomar cartas en el asunto.

Vamos a la resistencia por la defensa de nuestro territorio Wayuú



Entrevista

Jazmín Romero Epiayu

♦ Líder y activista por los derechos del pueblo Wayuú

Al incumplimiento por parte del Estado colombiano a la mayoría de las 210 órdenes de la Corte Constitucional para salvaguardar los derechos del pueblo Wayuú, definidas en la Sentencia T-302 de 2017 que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira, se suma el despojo territorial sistemático que sufren los Wayuú.

15 comunidades Wayuú han sido despojadas sin alternativas de reubicación digna y 36 —ubicadas en las proximidades de la Troncal del Caribe— están amenazadas por desalojos arbitrarios ordenados y ejecutados por instituciones judiciales y del poder ejecutivo —de orden nacional y local— que buscan expulsarlos de sus territorios para favorecer intereses de un grupo reducido de particulares y para realizar proyectos de infraestructura sobre los cuales no han sido debidamente consultados y no cuentan con el consentimiento previo, libre e informado de sus comunidades.

1. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno Petro ante la situación?

Nula. El Presidente Petro nos da la espalda. Cuando vino a La Guajira, gobernó con las agendas de las transnacionales, favoreciendo a empresas eólicas y otras transnacionales que explotan recursos en nuestro territorio. No vino a implementar una agenda que incluyera nuestra economía. Vino en contravía de la soberanía de los territorios de los pueblos indígenas.

2. ¿De qué manera se está organizando la comunidad para resistir?

Estamos en asamblea permanente interna, con la presencia de más de 15 autoridades indígenas que se suman a la lucha por la defensa del territorio. Durante ese proceso de reflexión interna, consideramos que ya agotamos todas las instancias de diálogo con el Gobierno, la Gobernación y la Alcaldía, no queda otra que movilizarnos pacíficamente por la defensa de nuestro territorio.

Para esto, acordamos tres puntos claves: primero, vamos a la resistencia, a la gran manifestación por la defensa y la dignidad de los territorios Wayuú; segundo, la conformación de un equipo técnico para la defensa del territorio; y tercero, la consolidación de alianzas con más de 63 comunidades Wayuú para resistir frente a los despojos. Hay que organizarse para construir un frente amplio que pueda determinar una lucha victoriosa por la defensa del territorio. Nuestros abuelos dicen que “*Movernos del territorio es como aniquilar el sueño de los Wayuú. Es como matar el espíritu de los Wayuú*”.

Para defender el arte y la cultura nacionales, los artistas deben organizarse



Entrevista

♦ Samuel Buelvas

Docente de Artes Plásticas de la Universidad del Atlántico. Director de la Casa Museo del Grabado en Soledad. Vicepresidente de la Unidad Nacional de Artistas (UNA).

1. ¿Se puede resistir desde el arte?

Para defender el arte y la cultura nacionales, los artistas deben organizarse. Solos no pueden hacer mayor cosa. Hay muchas situaciones frente a las cuales debemos hacer algo. A los gobiernos tanto nacionales como locales y regionales, poco o nada les importa la cultura. Prueba de ello son los pocos recursos que se le asignan al sector y el hecho de que muchas secretarías de cultura se hayan convertido en fortines politiqueros.

2. ¿Cuál ha sido el impacto social de la Casa del Museo del Grabado de Soledad Atlántico, fundada en 1910, que hoy usted dirige?

Hemos llegado a 8 barrios y cientos de familias. Los niños que nos visitan se llevan para sus casas una obra de arte, por lo general, un grabado. El arte y la cultura deben llegar a los hogares y a la gente del común. A mí me gusta el contacto con la gente y por eso las puertas de la Casa Museo, permanecen abiertas para todo el mundo. La cultura debe llegar a la gente del común y a las regiones. De allí mi decisión de quedarme trabajando en Soledad.



Imagen elaborada por Colombia Soberana.

3. ¿Qué opina del proyecto de reforma de Ley General de Cultura? ¿En qué ha cambiado la política del actual gobierno con respecto a la del gobierno anterior?

Lo que se plantea en el gobierno de Petro, en materia de arte y cultura, a excepción de algunos cambios retóricos, es lo mismo del gobierno anterior. Se habla mucho de proteger ciertas obras artísticas y bienes patrimoniales, pero se deja de lado al sujeto, esto es, al artista de carne y hueso, cuyas necesidades no se resuelven. Los artistas debemos juntarnos y luchar porque algún día se mejoren nuestras condiciones de existencia.

4. ¿Cuál ha sido su papel en la Unidad Nacional de Artistas (UNA)? ¿Considera importante que los artistas y personas interesadas en la cultura se organicen?

El problema fundamental es que los artistas no creemos en la organización. Muchas veces, dada la naturaleza de nuestra actividad, tendemos a aislarnos y por nuestras dificultades económicas, a vivir el día a día, en un rebusque constante, y al final, los egos se anteponen a proyectos colectivos y de largo aliento. Mi papel en la UNA ha sido, precisamente, ayudar a crear organización. Yo estaba muy pendiente de la UNA, antes de ingresar a ella. Además, tiene un logo que a mí me parece bien bonito (risas) y el nombre es muy fuerte: ¡Unidad!

Mientras más organizados estemos, nuestro radio de acción será mayor, toda vez que estamos metidos en una tarea colosal: defender la soberanía cultural de nuestro país.

Equipo Editorial

Co-Dirección: Juan Sebastián López Mejía, Katherine Mendoza y Juan Antonio Escobar.

Comité Editorial: Felipe Arango Posada, María Isabel Briceño, Duberney Galvis y Juan Sánchez.

Comunicaciones y redes sociales: Carlos Martínez, Eduardo Mestre y Alejandro López.

Diseño y Diagramación: Luisa C.

♦ **Correo electrónico:**

SoberaniaPeriodico@gmail.com

♦ **Teléfono:**

3176680894

* **Aporte voluntario. Este medio de comunicación se sostiene gracias a los esfuerzos de sus lectores y colaboradores.**



Imagen elaborada por Colombia Soberana.

Si las universidades no producen conocimiento, Colombia siempre va a estar a merced de otros países



Entrevista

Sandra Durán

♦ Profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora en educación social.

1. ¿Cuál es el papel que debe cumplir la educación para cambiar la condición de atraso y dependencia en la que vive Colombia, por la de un desarrollo autónomo?

Yo creo que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo de un país. La esencia de la universidad, está en la producción de conocimiento. Si las universidades no están enfocadas en producirlo, Colombia siempre va a estar a merced de otros países. Lo que hay que apoyar precisamente es la producción científica en la educación, apoyar a las universidades públicas y fortalecer la investigación. La investigación no debe ser un asunto de homogeneización, ni de servir a los intereses del modelo neoliberal. ¿A qué país le estamos apostando desde la formación de maestros?

2. ¿Se encuentra la educación superior con las fortalezas necesarias para ayudar a superar las trabas impuestas al país?

Por una parte nos dicen que tenemos que investigar, pero no nos dan los recursos ni las herramientas. ¿Tenemos condiciones, por ejemplo, para darles a los investigadores una vinculación continua, para que investiguen y no tengan que parar, y luego retomar la investigación? ¿Tenemos los recursos o son las universidades sacando de donde no hay para garantizar una vinculación a los investigadores? ¿Tenemos suficiente para que haya más monitores de investigación? No, no tenemos las condiciones.

3. ¿Cuál debe ser la demanda del movimiento universitario ante el gobierno para que la educación superior pueda cumplir a cabalidad el papel de soporte para la transformación del país?

Hay una clara violencia a la autonomía universitaria, por lo que pasó con la Universidad Nacional. Con ningún gobierno es admisible la injerencia en el posicionamiento de un rector, ¡con ninguno! Por eso, una bandera debe ser defender la autonomía universitaria. La universidad debe dar el horizonte de la educación.

Creo que es muy importante organizarnos y establecer mesas de diálogo que nos permitan enfrentar y abordar el momento histórico que estamos viviendo. Es necesario decirle al país y al Gobierno Nacional que hay cosas que deben transformarse, que hay acciones que deben tomarse con urgencia y que no pueden posponerse para mañana. El momento es hoy.

Cafeteros estamos entre el abandono del Gobierno y la burocratización de la Federación de Cafeteros



Entrevista

Carlos Arturo López Ríos

♦ Vocero de la Unión de Cafeteros de Colombia (UCC).

1. ¿Cuál es la situación de la caficultura colombiana?

Más del 80 % de los cafeteros están por debajo de las condiciones de pobreza, lo cual impide su progreso. Estamos entre el abandono permanente de los gobiernos de turno y la burocratización de la Federación de Cafeteros, tomada por unos pocos, aprovechándose de la contribución cobrada a los cafeteros. Eso ha conllevado a que haya existido una serie de manifestaciones continuas para exigir soluciones. Se deteriora la vida de quienes construyen el paisaje cultural cafetero, se reducen las áreas sembradas cada vez más, y envejece el parque cafetero por la falta de renovación y de los caficultores, porque los jóvenes se niegan a heredar esta labor en la que ven más sufrimiento que otra cosa. Hoy día, quienes en realidad se benefician son las multinacionales del negocio del café, mientras los cafeteros escasamente sobreviven.

2. ¿Qué ha respondido el Gobierno Petro?

El Gobierno sigue más dedicado a mantener esas disputas de índole administrativo por los dineros que maneja la Federación de Cafeteros, pero soluciones de fondo no hemos visto por ningún lado, con interpretaciones erróneas que hacen ministros, como el de Hacienda, Ricardo Bonilla, que llegó a hablar de "mini bonanzas", desconociendo nuestra realidad y precariedad.

Por el contrario, toman medidas, como el catastro multipropósito, afectando la actividad de los cafeteros. Han estado cerrados a dialogar, haciendo caso omiso de las manifestaciones que exigen estabilidad del precio, prefieren reunir personas a conveniencia. Falta voluntad política para tomar medidas que mejoren los índices de calidad de vida de 550 mil familias.

3. ¿Qué soluciones requiere el sector?

Que el Gobierno tome medidas y subsidie la estabilización del precio interno y haya una mediación para crear una veeduría a la administración de los dineros públicos a cargo de la Federación de Cafeteros. Eso de seguir administrando sin rendir cuentas públicas no se puede permitir. También revisar los recursos que transfieren empresas que explotan la imagen de los cafeteros colombianos, cuyas regalías al gremio son ínfimas, estos deben aumentar para invertirlos en programas que realmente beneficien a las bases cafeteras.

Queremos el fortalecimiento cooperativo pero no por intereses políticos, debe ser sin amaños y favorecimientos a pequeños grupos sometidos a la Federación o al Gobierno mismo. Nosotros buscamos que las ganancias lleguen a los caficultores, porque, si bien hay demanda del producto, en las condiciones actuales de olvido todo está dado para que la actividad desaparezca paulatinamente. Recientemente pude verificar que el café colombiano ni aparece en las vitrinas del mundo, lo usan es para mezclar. Si eso no cambia, seguiremos movilizándonos.



Lo que tenemos que hacer como país es unirnos para defender nuestra soberanía



Entrevista

Richard Fuelantala Delgado
♦ Senador de la República.

♦ 1. ¿Cómo llegó al Senado de la República?

Nuestra comunidad indígena, y especialmente mi padre, me enseñaron a defender los derechos políticos, sociales y económicos, amenazados con la política de libre comercio, lo que nos llevó a liderar movilizaciones en contra de los TLC y promover el paro agrario del 2013, que sirvió para que se reconociera la importancia del agro y las difíciles condiciones de vida de la gente que vive en el campo.

Como líder y servidor público, he abanderado la ética política como principio para la defensa de la democracia y la lucha en contra de la corrupción, siendo este uno de los grandes males que tiene nuestro país.

Me posesioné en noviembre de 2023 por una nulidad electoral y en mi primera intervención ratifiqué nuestra defensa de la población rural, campesinos, indígenas y afros, que vienen reclamando mayor atención del Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos, la soberanía alimentaria y la producción nacional.

♦ 2. ¿Es verdad que la agricultura está creciendo “como nunca en la historia”?

No es verdad lo que afirmó el señor presidente en el Congreso el 20 de julio, ya que, según el DANE, en los seis trimestres de este gobierno, el sector de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca solo creció al 1,3 %, mientras que con Duque fue del 2,3 % y con Santos, 3,8 %. En este aspecto, al gobierno le va muy mal, incluso peor que a los anteriores. Está rajado, como se dice popularmente.

♦ 3. ¿Ha hecho control político frente al tema?

Nuestro primer debate en plenaria del Senado fue sobre la Reforma Agraria. Encontramos que con el enfoque que le ha dado este gobierno no se resuelven los problemas del agro, que está lejos de cumplir la meta del Plan Nacional de Desarrollo de entregar 3 millones de hectáreas, que no se sabe qué ha pasado con los \$6,8 billones que se le asignaron a la Agencia Nacional de Tierras y que nadie responde por las graves irregularidades en algunas compras.

Concluimos que la reforma agraria ha quedado reducida a un programa de compra y venta de tierras y que, mientras no cambiemos el modelo agrario de los últimos 30 años, estaremos condenados a seguir importando comida subsidiada y a ver la pobreza en los campos. Es necesario renegociar los TLC, aplicar salvaguardias y proteger sectores estratégicos.

♦ 4. Entre los sectores amenazados está el suyo, la leche, cuyo precio lleva 16 meses cayendo.

La crisis de la leche es la más grave de los últimos años, pero no nos vamos a rendir. Hemos convocado a decenas de reuniones y movilizaciones, dirigimos una carta al presidente que firmaron todos los partidos, presentamos un proyecto para sacar los lácteos de los “impuestos saludables” y citamos una audiencia pública de la Comisión IV en Ubaté, a la que asistieron 3.500 productores. De allí surgió la creación de una mesa técnica nacional donde se definen 10 puntos que el gobierno debe atender de manera urgente. Se ha logrado que se avance en control del contrabando, promoción del consumo, compras públicas y, lo más importante, la apertura de una investigación por subvenciones a las exportaciones de leche de EE. UU. Se encontró que las están subsidiando con casi \$2 mil millones de dólares al año, violando su propio TLC, que permite hacer este proceso para castigarlos subiendo el arancel. Los gremios lecheros de EE. UU. y congresistas, demócratas y republicanos, respondieron amenazando a Colombia con tomar represalias. ¡Nosotros también debemos unirnos para defender nuestro sector!

♦ 5. ¿Qué ha podido hacer con los demás sectores?

En el Tolima conocí la dificultad que tienen los arroceros con las altas tasas de uso de agua (TUA) y los costos de producción. Presentaremos un proyecto para regular el cobro de esta tasa. He participado en los debates sobre el café, acompañé a la Unión de Cafeteros en la protesta que logró el ajuste del factor 88 a 94, y defendí la estabilidad de precios, siendo coautor del proyecto de ley que busca destinar 2 centavos de dólar para el Fondo de Estabilización de Precios del Café y oponiéndome a la destrucción de su institucionalidad. Con los paperos, trabajamos para que se atienda la enfermedad Punta Morada y convocamos a audiencia pública para decirle al gobierno que no es el momento de aumentar el precio del ACPM.

Conseguí el trato diferencial de protección para la vejez de los pueblos indígenas, afro y campesinos. Para estos últimos estamos tramitando la ley del Fondo PESCA (Promoción de la Educación Superior para las Comunidades Campesinas) que busca otorgar becas a esta población. En las audiencias de regiones autónomas, buscamos que el Estado tenga una mayor descentralización e inversión en los territorios marginados. A pesar de la reticencia del gobierno, creé el artículo que otorga 5 días sin IVA al año para las zonas de frontera. Además, vamos a proponer que se adopte al marco legal el reconocimiento de los títulos coloniales indígenas y una exención del IVA para insumos agropecuarios.

♦ 6. ¿Cuál es su mensaje para los colombianos?

He tratado, a través de mi accionar, de unir a sectores sociales a los que por conveniencia quieren polarizar y mantener divididos. He llevado a cabo una tarea, a lo largo y ancho del país, de unir, por ejemplo, a los indígenas, a los afros y campesinos, ya que los problemas del territorio son comunes. Lo que tenemos que hacer como país es unirnos para defender nuestra soberanía.

“Unidad y resistencia civil frente a la destrucción de Colombia por el Gobierno de Petro”: Aurelio Suárez, en el Congreso Nacional de Fenalco

Gran repercusión en la opinión nacional ha causado la intervención del ingeniero Aurelio Suárez Montoya en el congreso de la Federación Nacional de Comerciantes, realizado el mes de septiembre en Barranquilla. En las redes sociales se hizo viral la contundente posición presentada por el analista, en la que criticó la gestión del Gobierno Petro, del cual dijo que en lugar de resolver los problemas de los que tanto habla, se ha dedicado a agravarlos con la destrucción de bastiones nacionales como Ecopetrol, la Universidad Nacional y el sector cafetero, entre otros. Suárez fue enfático en señalar que Petro “no es de izquierda” y ha sido obediente en aplicar los lineamientos del FMI, la OCDE y demás poderes globales que impulsan las políticas antinacionales que le han hecho daño al país durante las últimas décadas. Asimismo, llamó a la más amplia unidad para defender a Colombia de la destrucción impulsada por el Gobierno Petro con el auspicio de Estados Unidos e iniciar una recuperación de la economía nacional y, con ello, del desarrollo del país.

